

Foro de Desarrollo Sostenible

8 de marzo 2022

Intervención de Shi Alarcón-Zamora.

La sociedad civil, a través del Mecanismo de Participación, ya ha dejado clara nuestra preocupación por seguir en un estancamiento económico y de todos los indicadores sociales, ambientales, laborales y de acceso a los derechos fundamentales, agudizando una crisis que vivimos desde antes que la pandemia del COVID 19 y que ahora es más profunda, resultando en un obstáculo importante para alcanzar con lo comprometido en la Agenda 2030 en la Región.

En el marco del 8 de marzo, y considerando la realización de este evento regional en Centroamérica, no podemos evitar señalar la preocupación de toda la sociedad civil que represento el avance de propuestas autoritarias y dictatoriales de diversos gobiernos de la región en la construcción de políticas públicas que generan el retroceso en los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.

Conceptos como democracia y estado de derecho, hoy son como palabras vacías que no resuenan en una región, donde los datos indican una instrumentalización de las instituciones para criminalizar a defensoras de derechos. Hemos visto cómo los estados no responden a las violencias, injusticias y persecución que vivimos las mujeres en toda nuestra diversidad (y digo toda nuestra diversidad ahora, pero en adelante cuando digo mujeres me refiero a esta diversidad): indígenas, trans, no binaries, adultas mayores, niñas, adolescentes, juventudes, trabajadoras sexuales, afrodescendientes, de la diáspora y del Caribe, mujeres viviendo con VIH, exiliadas, presas y migrantes, lesbianas, bisexuales, pansexuales, asexuales y queer, trabajadoras informales, autónomas, domésticas, de la economía informal, mujeres rurales, mujeres con discapacidad y estudiantes, entre otras..

Estados que no responden a su obligación de garantizar nuestros derechos y ahora, han aprovechado una pandemia para quitar de las políticas públicas las prioridades, las necesidades y demandas de las mujeres. Antes del Covid 19 el rol impuesto a las mujeres nos ha tenido en casa, con miedo de salir, por el riesgo a la violencia y a la discriminación. Pero viviendo violencia también dentro de nuestras casas.

Ante la posibilidad de los recortes para sostener un sistema económico que privilegia el crecimiento pero no la redistribución, vemos cómo las políticas sociales de prevención y

atención son las primeras en ser eliminadas, y las instituciones que fueron creadas para respaldar nuestros derechos se han visto amenazadas con desaparecer, incluso dejadas sin presupuesto. Por ejemplo, no fue casual que en estos dos últimos años, las organizaciones de mujeres y feministas hayamos tenido que salir a la calle para evitar el cierre técnico del Instituto Nacional de las Mujeres en el caso de Costa Rica.

Es con desespero que vivimos en la región y en centroamérica donde la sociedad civil se ve perseguida y amenazada ante los Estados que buscan debilitarlas, imposibilitarles del acceso a recursos, limitando su derecho a participación. Son las organizaciones de mujeres, que han venido históricamente haciendo control y monitoreo político y quienes han venido resistiendo a las estrategias militarizadas, como en Nicaragua, que por cuarto año consecutivo no podrán salir a las calles a manifestar sus demandas y que además, sigue teniendo presas políticas y más recientemente en el Salvador, que en nombre de reformas fiscales, cobran altos porcentajes del dinero que es para el avance en los derechos de las mujeres.

Ademas, los efectos de los megaproyectos y de esa militarización en las comunidades y pueblos indígenas, afectan de forma particular y permanente a las niñas, jóvenes y mujeres indígenas, que sufren violencia sexual, daños a su salud y sus cuerpos por la contaminación en el agua y la tierra.

Vemos discursos populistas casándose con los grupos religiosos conservadores y antiderechos, los primeros para ganar votos, los segundos para imponer su agenda. Ninguno, con principios para pensar y analizar lo que dice el otro, cada quien asegurando su trinchera. Recusamos y rechazamos esas narrativas instauradas que pesan sobre los cuerpos de las mujeres en toda nuestra diversidad y el respaldo a una figura que parece ser padre, déspota, salvador, guerrero y sobre todo opresor, que reafirma los estereotipos del género, minimiza las vivencias de las mujeres y ve como decorativas nuestras demandas.

Denunciamos que la justicia, también sigue siendo patriarcal, vemos sentencias que sopesan con prudencia las ventajas sin importar la trascendencia e importancia de los resultados, apoyándose en tecnicismos para negar las violencias cotidianas e históricamente de las mujeres, no es casual que en Costa Rica como en toda América Latina se perdone e idolatre a jugadores de fútbol en razón de su desempeño futbolístico, o a políticos con base en su carisma o vínculos, sin importar las consecuencias de sus actos, aun cuando sea contra personas menores de edad y mujeres. Lamento que en el 2022, tenemos que seguir hablando de relaciones de poder a personas que sus privilegios

les protegen para no tener que reconocerlas y transformarlas. Como dice Alicia Bárcena, debemos acabar con la cultura del privilegio.

La cultura del privilegio se acaba con una educación para todas las personas con perspectiva de género e interseccional, no seremos iguales hasta que no se cuente también nuestra historia: la marea verde, matrimonio igualitario, la defensa de los territorios indígenas, la defensa del agua, la verdad sobre Berta Cáceres, disminuyendo la brecha tecnológica e incorporando a las mujeres en ciencia y tecnología, comprometidos con una educación sin discriminación a las personas lbtqi+ incluyendo el Reconocimiento de infancias diversas.

Por eso exigimos poner fin a todas las violencias, persecución y criminalización, y la asunción plena de la responsabilidad por parte de los Estados de garantía de los derechos humanos, civiles y laborales, así como el pago de la reparación, a través de la regulación y control de las explotaciones de todas las empresas, incluidas las multinacionales. Esto además requiere el cumplimiento de acuerdos internacionales firmados y la revisión de la legislación vigente y la adopción de leyes acordes a los derechos humanos, económicos, sociales, laborales, ambientales y culturales, en el marco de la normativa adoptada por todo el Sistema de Naciones Unidas e impulsar el carácter vinculante de las mismas.

Hoy, a pesar del compromiso con la Agenda 2030, las defensoras de la tierra, siguen amenazadas, golpeadas, encarceladas injustamente, la justicia climática sigue siendo un pendiente y vemos un país que es verde hacia afuera pero que esperó hasta el último momento para decidir no firmar el acuerdo de Escazú, una resistencia que podría ser innecesaria sabiendo la gran riqueza natural y turística que tenemos en nuestro país y la carrera que tenemos para hacerle frente al cambio climático, detener el extractivismo y el saqueo de nuestros territorios.

Nos hablan de la defensa de la vida, pero en nombre del discurso antiderechos vemos como en Guatemala se quiere declarar la capital iberoamericana provida, mientras en el 2019 vimos como murieron 41 niñas calcinadas. Tienen la audacia de llamarnos a nosotras asesinas, mientras luchamos y decimos "no" a que las mujeres sigan muriendo en la clandestinidad y sí a que puedan tener acceso a medicamentos, una mejor calidad de vida y a decidir libremente si quieren abortar o maternar.

Nos quieren robar la familia, hablando de tradiciones y costumbres, mientras que cada año vemos a más personas, niños, adolescentes y jóvenes expulsados de sus hogares

en nombre de su orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas porque así lo decidió un pastor, porque se olvidan de que las familias son aquellas que te apoyan, te aman y te respetan.

Porque quieren hablarnos de valores, cuando seguimos negando las posibilidades de que las mujeres trabajen en mejores condiciones, porque vemos que los trabajos son cada vez más precarizados y donde a las mujeres trabajadoras sexuales, ni siquiera los estados las reconocen y se las empuja a la clandestinidad.

En nombre de la moral, siguen apropiándose de unos cuerpos que no les pertenecen, que no le son propios, que están en las costas, en las zonas rurales, en las zonas fronterizas, que en búsqueda de mejores oportunidades, enfrentan el riesgo de ser violadas, invisibilizadas y lamentablemente culpabilizadas.

No quisiera que crean que todo está mal, para balancear el desánimo debo reconocer que hay algo bueno: Las feministas y las mujeres en toda nuestra diversidad, seguimos luchando.